

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	EDGAR IVÁN ARCILA GIRALDO
DEMANDADO	ELFI JULIANA RÚA SÁNCHEZ
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 022 2022 00439 01 INTERNO 2023-030
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N°057
TEMAS	MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 3 de febrero de 2023, mediante el cual se decretaron algunas cautelas y se denegaron otras pedidas por la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante apoderado judicial el señor Edgar Iván Arcila Giraldo formuló demanda verbal en contra de Elfi Juliana Rúa Sánchez con las siguientes pretensiones:

“Primera: Declárese que los señores Edgar Iván Arcila Giraldo, en calidad de Promitente Vendedor y la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, en calidad de Promitente Compradora, celebraron válidamente un Contrato de Promesa de Compraventa, el cual tenía por objeto un inmueble, los muebles y enseres con los que estaba dotada la vivienda construida en éste, una cuatrimoto, una moto acuática y una embarcación menor.

Segunda: Declárese que el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, cumplió o se allanó a cumplir las obligaciones a su cargo.

Tercera: Declárese que los negocios jurídicos celebrados en relación con los vehículos se encuentran perfeccionados válidamente.

Cuarta: Declárese que hasta la presentación de la demanda la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, pagó en dinero y/o en especie al señor Edgar Iván Arcila Giraldo, la suma de mil ochocientos treinta millones de pesos (\$ 1.830.000.000), de los cuales doscientos millones de pesos (\$ 200.000.000) corresponden al pago del precio de los vehículos cuya venta se encuentran perfeccionada válidamente.

Quinta: Consecuencialmente declárese que hasta la presentación de la demanda la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, había abonado en dinero y/o en especie, al precio del inmueble prometido en venta la suma de (\$1.630.000.000).

Sexta: Declárese que, en relación con la promesa de celebrar el contrato de compraventa del inmueble, la promitente compradora Elfi Juliana Rúa Sánchez, incumplió las prestaciones a su cargo, pues no pagó oportunamente el precio pactado, no compareció al otorgamiento de la escritura pública, ni ha pagado los intereses corrientes pactados.

Séptima: Consecuencialmente declárese resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado entre Edgar Iván Arcila Giraldo en calidad de Promitente Vendedor y, la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez en calidad de Promitente Compradora, el día 22 de septiembre de 2022, únicamente en relación con el inmueble y los muebles y enseres prometidos en venta.

Octava: Consecuencialmente condénese a la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, a:

8.1. Restituir al señor Edgar Iván Arcila Giraldo, el inmueble prometido en venta, con los muebles y enseres con los que se encontraba amoblado.

8.2. Restituir al señor Edgar Iván Arcila Giraldo los frutos civiles del inmueble, así:

8.2.1. Frutos civiles pasados o consolidados: Equivalen al valor de la renta mensual del inmueble, desde el día 22 de septiembre de 2021, fecha de celebración del contrato hasta la presentación de la demanda, es decir el día 7 de diciembre de 2022, y de conformidad con el dictamen pericial allegado ascienden a la suma de ciento sesenta y nueve millones quinientos treinta y siete mil trescientos treinta y seis pesos (\$ 169.537.336).

8.2.1. Frutos civiles futuros: Corresponden al valor de la renta mensual del inmueble, que se cause a partir de la presentación de la demanda y hasta la efectiva restitución del mismo, actualizados a la fecha de su pago, para lo cual se aplicará la variación del índice de precios al consumidor durante el respectivo periodo. Por cada mes de ocupación del inmueble, deberá pagar la suma de once millones ochocientos cinco mil pesos (\$11.805.000)

8.3. A indemnizar los perjuicios causados con su incumplimiento al señor Edgar Iván Arcila Giraldo, así:

8.3.1. Patrimoniales:

8.3.1.1. Daño emergente pasado o consolidado • La suma de \$39.000.000 por concepto de la comisión inmobiliaria pagada hasta ahora por el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, al señor Alejandro Osorio Estrada. • La suma de \$ 2.023.000 por concepto de los honorarios profesionales pagados por el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, a la sociedad Proyectos y Valoraciones S.A.S. por la elaboración del dictamen pericial aportado con la demanda. • La suma de \$ 245.937.500, por concepto de los honorarios profesionales pagados por el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, por la representación jurídica en el presente proceso.

8.3.1.2. Daño emergente futuro • En caso de ser condenado el señor Edgar Iván Arcila Giraldo a pagar a la demandada intereses civiles sobre los dineros a restituir, condénese a la demandada a pagar al demandante una suma equivalente por dicho concepto.

8.3.2.1. A título de perjuicios morales: una suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago. Novena: Declárese que para el abono de las expensas a la contratante incumplida Elfi Juliana Rúa Sánchez, ésta será considerada como poseedora de mala fe.

Décima: Declárese que el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, deberá restituir en dinero a la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, el valor recibido como abono al precio del inmueble, previa compensación o descuento de las condenas que ella le deba pagar.

Undécima: Declárese que el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, en su calidad de contratante cumplido, no deberá pagar a la contratante incumplida Elfi Juliana Rúa Sánchez, ninguna suma por concepto de mejoras plantadas en el inmueble e intereses civiles sobre las sumas que deba restituir. Duodécima: Condénese a la demandada Elfi Juliana Rúa Sánchez, al pago de las costas y agencias en derecho que se deriven del proceso”.

Como sustento fáctico de las pretensiones se narra que, mediante escritura pública otorgada el día 3 de diciembre de 2019 ante la Notaría Única de El Peñol-Antioquia, los señores Álvaro Andrés de los Ríos Gutiérrez y Edgar Iván Arcila Giraldo, celebraron un contrato de compraventa en el cual el primero le vendió al segundo un derecho o cuota parte equivalente al 43,28% de la “SANA POSESIÓN Y MEJORAS (INSCRITAS EN CATASTRO) Y LAS ACUMULADAS” sobre el inmueble identificado así: *“Lote de terreno, denominado La Chapa, jurisdicción del Municipio de El Peñol, con un área según catastro de 11,086 metros cuadrados, alinderado según antetítulo así: “Por el Norte, en parte, con terrenos de la Sucesión de Ramón Velásquez, (Ana Felisa Estrada) desde el lindero de la sucesión de Antonio J. Ospina, hoy empresas, hasta encontrar lindero con predio de Antonio Morales y en parte con este último propietario desde el lindero con Ramón Velásquez, por el Sur, con predio de Ana María Valencia, desde el lindero de Antonio Morales hasta encontrar finca que fue de la sucesión de Antonio J. Ospina, hoy empresas, por el oriente, con terrenos de Las Empresas Públicas que fueron de la sucesión de Antonio J. Ospina y por el Occidente, en parte con Antonio Morales, desde el lindero de Ramón Velásquez, hasta el de Ana María Valencia, y con éste desde allí hasta terrenos de la sucesión de Antonio J. Ospina, hoy Empresas”.*

Que desde “entonces” el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, comenzó a poseer de manera exclusiva una parte del terreno con un área aproximada de 4.796,05 metros cuadrados; que allí había construido una pequeña casa de habitación y que el lote en su costado sur lindaba con el resto del predio cuya posesión material quedó en cabeza del vendedor Álvaro Andrés de los Ríos Gutiérrez.

Que el demandante realizó mejoras al inmueble, reformando la casa de habitación convirtiéndola en una construcción moderna, lujosa y amplia, con un área total de 548 metros cuadrados; mejoró el entorno construyendo vía de acceso hasta la represa pavimentada y, una vez culminada la construcción dotó de muebles y enseres la casa y comenzó a disfrutar el inmueble.

Que el 3 de julio de 2020, el demandante promovió proceso con pretensión de pertenencia, en el cual, acudiendo a la suma de posesiones, pretendió ser declarado señor y dueño del lote por él poseído, proceso cursó en el Juzgado Promiscuo Municipal de El Peñol-Antioquia bajo el radicado N° 05 541 40 89 001 2020 00119 00.

Que estando en curso el proceso, mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2020, ante la Notaría 23 de Medellín, los señores Álvaro Andrés de los Ríos Gutiérrez y Edgar Iván Arcila Giraldo, celebraron un nuevo contrato de compraventa, en el cual el primero le vendió al segundo, el resto del derecho o cuota parte de la *“SANA POSESIÓN Y MEJORAS (INSCRITAS EN CATASTRO) Y LAS ACUMULADAS”* sobre el inmueble descrito en el hecho primero, es decir, le vendió el 56,72% restante.

Que, con sustento en dicha compra, el señor Edgar Iván Arcila Giraldo entró en posesión del 100% del lote de terreno, por lo cual se presentó reforma a la demanda de pertenencia, con la finalidad de ser declarado señor y dueño del 100% del inmueble.

Que con intermediación de un comisionista, en el mes de septiembre de 2021, el demandante y la demandada comenzaron a dialogar con la finalidad de celebrar un contrato de promesa de compraventa sobre el predio poseído por el demandante, negociación que incluía los muebles y enseres de la vivienda, una cuatrimoto, una moto acuática y una embarcación menor.

Que debido a que las negociaciones habían avanzado en cuanto al alcance, las obligaciones y los términos en los que celebraría el contrato de promesa de compraventa, decidieron los negociantes que, previo a la celebración del contrato, la señora Rúa Sánchez podría ocupar el inmueble y ésta entregaría de manera anticipada al señor Arcila Giraldo la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000).

Que el 14 de septiembre de 2021, la demandada entregó al demandante la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000), mediante dos (2) cheques de gerencia del Banco Davivienda y el día 15 de septiembre de 2021, el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, le entregó a título de comodato precario a la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez el lote de terreno plurimencionado, contrato celebrado por documento privado entre las partes.

Que el 22 de septiembre de 2021, Edgar Iván Arcila Giraldo en calidad de promitente vendedor y Elfi Juliana Rúa Sánchez en calidad de promitente compradora, celebraron válidamente contrato de promesa de compraventa, en el cual el demandante se obligó a celebrar un contrato de compraventa con la demandada Elfi Juliana Rúa Sánchez y, en consecuencia, transferir a título de venta a ésta, los siguientes bienes:

“14.1. Un lote de terreno situado en el paraje La Chapa, jurisdicción del municipio de El Peñol, Antioquia. El cual se identificaba con el código catastral 2010000170018700000000 y tenía asignada la ficha predial número 16366755. El inmueble prometido en venta hacía parte de un inmueble de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 018 – 31715 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, Antioquia. Frente a su área y linderos las partes acordaron que si bien tenía una cabida aproximada de 11.086 metros cuadrados, la venta se haría como especie o cuerpo cierto, indicándose como linderos del inmueble los siguientes (...). En la venta del inmueble prometida quedaban incluidos los muebles y enseres con los que se encontraba dotada la casa de habitación.

14.2. La Cuatrimoto de placa FTI 76B.

14.3. La Moto acuática o Jet Ski FC1800A-P, marca Yamaha, con manifiesto de importación número 192014000127732, modelo 2015, color Blanco, motor número 6ET1006169, chasis número US-YAMA1970I415, serial número USYAMA1970I415.

14.4. La Embarcación menor tipo lancha denominada MARGIL, con patente de navegación número 11022201, expedida por la Inspección Fluvial de Guatapé – El Peñol, con matrícula número 11022201, libro 11, folio 067, del 20 de diciembre de 2018, con registro técnico número 11022201, marca SEA DOO, modelo SPEEDSTE, serie US-CEC15043A707, con capacidad para 8 pasajeros”.

Que en el contrato de promesa se dejó claro que al momento de la celebración del contrato el señor Edgar Iván Arcila Giraldo, tenía la calidad de poseedor material y que éste había promovido proceso de pertenencia; que las partes pactaron que en el evento de que Edgar Iván Arcila Giraldo fuera declarado señor y dueño del inmueble prometido en venta antes de la fecha pactada para el otorgamiento de la escritura pública, éste quedaba facultado para anticipar el otorgamiento de la misma y, en la cláusula decimotercera, pactaron una condición resolutoria contractual, en la que acordaron que si por cualquier motivo, para el día 19 de septiembre de 2024, Edgar Iván Arcila Giraldo no había sido declarado señor y dueño del inmueble, el contrato de promesa celebrado se resolvería, sin ningún tipo de sanción; también acordaron que la venta se efectuaría como especie o cuerpo cierto, renunciando la promitente compradora a cualquier reclamación relacionada con el área y linderos del inmueble.

Que como al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, el demandante tenía la calidad de poseedor del inmueble, las partes decidieron pactar un plazo amplio para el otorgamiento de la escritura pública que perfeccionaría la venta, en cuya virtud, estipularon que ésta sería otorgada el día 20 septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., en la Notaría Segunda de Rionegro. No obstante, en el evento de que el promitente vendedor fuese declarado señor y dueño del inmueble antes la fecha pactada para el otorgamiento de la escritura pública, éste quedaría facultado para anticipar la fecha y hora para llevar a cabo dicho acto y debía comunicar a Elfi Juliana Rúa Sánchez vía correo electrónico, con un preaviso mínimo de 30 días calendario, la nueva fecha y hora, quedando obligada a comparecer a la Notaría, y a pagar el saldo adeudado del valor del inmueble, antes del otorgamiento de la escritura pública.

Que, en relación con los vehículos prometidos en venta, las partes acordaron que al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa los vehículos ya se encontraban en poder de la promitente compradora Elfi Juliana Rúa Sánchez; que los vehículos no gozaban de ningún tipo de garantía; que la promitente compradora realizaría los trámites necesarios para materializar el traspaso de los vehículos automotores en un plazo de tres (3) meses, contados a partir del 22 de septiembre de 2021, quedando obligado el promitente vendedor a entregarle la documentación necesaria para tal fin.

Que, el día 7 de octubre de 2021, el promitente vendedor entregó a la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez la documentación necesaria para el traspaso de los vehículos automotores, dejando constancia de ello en un acta suscrita por las partes.

Que, como precio de los bienes prometidos en venta, las partes pactaron la suma de dos mil quinientos millones de pesos (\$2.500'000.000), discriminados así:

- a. Dos mil trescientos millones de pesos (\$2.300.000.000), correspondía al valor del inmueble y de los muebles y enseres con los que se encontraba amoblado.
- b. Doscientos millones de pesos (\$200.000.000), correspondía al valor los vehículos descritos en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 de la cláusula segunda. Vigésimoprimer: Elfi Juliana Rúa Sánchez, se obligó a pagar el precio pactado a Edgar Iván Arcila Giraldo, en los siguientes términos: a. La suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000), el día 14 de septiembre de 2021. b. La suma de quinientos millones de pesos (\$ 500.000.000), el día 27 de septiembre de 2021.
- c. La suma de mil cuatrocientos millones de pesos (\$ 1.400.000.000), el día 22 de enero de 2022.
- d. La suma doscientos veinte millones de pesos (\$ 220.000.000), con el otorgamiento de la Escritura Pública que perfeccionaría la transfiere el derecho real de dominio sobre el inmueble.
- e. La suma de doscientos ochenta millones de pesos (\$280.000.000), el día 22 de octubre del año 2021, mediante dación en pago del apartamento 1901, del "Edificio Zeratto - Propiedad Horizontal", ubicado en la calle 14 N° 25-30 del barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga, Santander, identificado con la matrícula inmobiliaria número 300 - 416726 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga. La Escritura Pública que perfeccionaría la dación en pago, debía ser otorgada el día 22 de octubre del año 2021, a las 10:00 a.m., en la Notaría Segunda (2ª) del Círculo de Rionegro, Antioquia.

Que la demandada incumplió con la forma de pago acordada y después de múltiples requerimientos del demandante, realizó los siguientes pagos:

- a. El día 5 de octubre de 2021, pagó la suma de quinientos millones de pesos (\$500.000.000), los cuales debió cancelar el día 27 de septiembre de 2021, es decir, incurrió en una mora de 8 días.
- b. No compareció el día 22 de octubre del año 2021, a las 10:00 a.m., en la Notaría Segunda (2ª) del Círculo de Rionegro, Antioquia, a realizar la transferencia mediante dación en pago del apartamento 1901, del "Edificio Zeratto Propiedad Horizontal". Ésta finalmente fue realizada mediante la Escritura Pública número 1748, otorgada el día 12 de noviembre de 2021, ante la Notaría Única de El Santuario, Antioquia, es decir, casi 20 días después del plazo pactado.
- c. El día 22 de enero de 2022, no cumplió con el pago de los mil cuatrocientos millones de pesos (\$ 1.400.000.000), con los que se había obligado.

Que después de múltiples requerimientos realizados por el demandante solicitando el pago de los mil cuatrocientos millones de pesos (\$ 1.400.000.000) adeudados, el día 1 de abril de 2022, la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, abonó al señor Edgar Iván Arcila Giraldo la suma de setecientos millones de pesos (\$700.000.000).

Que el 4 de abril de 2022 las partes decidieron celebrar un otrosí al contrato de promesa de compraventa, únicamente con la finalidad de modificar la forma de pago pactada, por lo que se modificó la cláusula novena del contrato, la cual quedó redactada así:

“Novena – Forma de Pago –: La Promitente Compradora se compromete a pagar el precio al que se refiere la cláusula Séptima a El Promitente Vendedor de la siguiente manera: 9.1 La suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000), que fueron pagados por La Promitente Compradora a El Promitente Vendedor, el día 14 de septiembre de 2021, mediante dos (2) cheques de gerencia del Banco Davivienda expedidos a nombre la sociedad Newell Brands de Colombia S.A.S., por valor de cincuenta millones de \$ 50.000.000 cada uno. Los cuales declara recibidos a entera satisfacción El Promitente Vendedor, quien desde entonces expidió el correspondiente recibo. 9.2 La suma de quinientos millones de pesos (\$ 500.000.000), que fueron pagados por La Promitente Compradora a El Promitente Vendedor, el día 5 de octubre de 2021. Los cuales declara recibidos a entera satisfacción El Promitente Vendedor. 9.3 La suma de doscientos ochenta millones de pesos (\$280.000.000), que fueron pagados por La Promitente Compradora a El Promitente Vendedor, el día 12 de noviembre de 2021, mediante dación en pago del apartamento 1901, ubicado en el piso 19 del denominado "Edificio Zeratto - Propiedad Horizontal", cuya nomenclatura es calle 14 N° 25-30, acceso principal al edificio Zeratto del barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga. Identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 300 - 416726 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, y número predial 010301200239905. Esta fue protocolizada mediante la Escritura Pública número 1748, otorgada el día 12 de noviembre de 2021, ante la Notaría Única de El Santuario, Antioquia. El cual declara recibido a entera satisfacción El Promitente Vendedor. 9.4 La suma de setecientos millones de pesos (\$ 700.000.000), que fueron pagados por La Promitente Compradora a El Promitente Vendedor, el día 1 de abril de 2022, mediante consignación a la cuenta corriente 325 376815 71 de Bancolombia, a nombre de El Promitente Vendedor. Los cuales declara recibidos a entera satisfacción El Promitente Vendedor. 9.5 La suma de doscientos cincuenta millones de pesos (\$250.000.000), mediante dación en pago que hará La Promitente Compradora a El Promitente Vendedor, de los siguiente vehículos: 9.5.1. Moto acuática o Jet Ski FC1800A-P, marca Yamaha, con manifiesto de importación número 192014000127732, modelo 2015, color Blanco, motor número 6ET1006169, chasis número US-YAMA1970I415, serial número USYAMA1970I415. La Promitente Compradora entregó a El Promitente Vendedor la misma, el día 2 de abril de 2022, la cual declara recibida a entera satisfacción el Promitente Vendedor. 9.5.2. Minicargador marca Caterpillar, modelo 2010, con registro número MC108828, con las siguientes características: Entrega:

La Promitente Compradora entregó a El Promitente Vendedor el Minicargador, el día 4 de abril de 2022, el cual declara recibido a entera satisfacción el Promitente Vendedor. Página 9 de 23 Traspaso: La Promitente Compradora Elfi Juliana Rúa Sánchez, se obliga a realizar los trámites necesarios para materializar el traspaso del Minicargador a El Promitente Vendedor o quien éste designe, en un plazo máximo de 2 meses a partir de la firma de la presente. Asimismo se obliga a suministrar la información que se requiera y/o suscribir la documentación que sea necesaria para tal fin. 9.5.3. MINI COOPER S PACEMAN, de placa HEY 816, modelo 2014, con las siguientes características: Entrega: La Promitente Compradora entregó a El Promitente Vendedor el Mini Cooper S Paceman, el día 1 de abril de 2022, el cual declara recibido a entera satisfacción el Promitente Vendedor. Traspaso: La Promitente Compradora Elfi Juliana Rúa Sánchez, se obliga a realizar los trámites necesarios para materializar el traspaso del Mini Cooper S Paceman, a El Promitente Vendedor o quien éste designe, en un plazo máximo de 1 mes a partir de la firma de la presente. Asimismo se obliga a suministrar la información que se requiera y/o suscribir la documentación que sea necesaria para tal fin. 9.6 La suma de seiscientos setenta millones de pesos (\$670.000.000), que deberán ser cancelados por La Promitente Compradora a El Promitente Vendedor, con el otorgamiento de la Escritura Pública que transfiera el derecho real de dominio sobre el inmueble prometido en venta. El pago de la suma anteriormente indicada, podrá ser cancelada con recursos provenientes de crédito bancario que gestione La Promitente Compradora, caso en el cual, El Promitente Vendedor suministrará la documentación del inmueble necesaria para tal fin. En dicho evento, por solicitud escrita de la Promitente Compradora, la Escritura Pública que perfeccione la venta podrá otorgarse en favor de la entidad bancaria. Parágrafo primero: Las partes acuerdan y desde ahora aceptan que a partir de la fecha de la presente, es decir, desde el día 4 de abril de 2022, La Promitente Compradora reconocerá y pagará a El Promitente Vendedor, intereses mensuales a una tasa equivalente al uno punto dos por ciento (1,2%) mensual. Dicho interés se causará sobre el saldo del precio adeudado, hasta el momento en que realicen el pago total de la obligación, teniendo en cuenta los abonos que realice La Promitente Compradora. Página 10 de 23 Parágrafo segundo: Las partes acuerdan que La Promitente Compradora, podrán realizar abonos anticipados a las sumas de dinero adeudadas, por lo que El Promitente Vendedor, se obliga a recibir dichos abonos y a extender los correspondientes recibos. [...]

Que con ocasión del otrosí, Elfi Juliana Rúa Sánchez, quedó obligada a pagar a Edgar Iván Arcila Giraldo, con el otorgamiento de la Escritura Pública, el saldo del precio pactado, es decir, la suma de seiscientos setenta millones de pesos (\$670.000.000); reconocer y pagar a Edgar Iván Arcila Giraldo, sobre el saldo del precio adeudado intereses mensuales a una tasa equivalente al uno punto dos por ciento (1,2%) mensual; realizar el trámite de traspaso de los vehículos entregados mediante dación en pago -Contando con un plazo máximo de un (1) mes para el traspaso del Mini Cooper S Paceman, de placa HEY 816 y un plazo máximo de dos (2) meses para el traspaso del Minicargador marca Caterpillar, modelo 2010, con registro número MC108828-.

Que el proceso de pertenencia terminó con sentencia en la que el señor Edgar Iván Arcila Giraldo fue declarado señor y dueño del inmueble pretendido, por lo cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, el día 7 de abril de 2022, procedió con la apertura del respectivo folio de matrícula inmobiliaria, correspondiéndole el número 018-176985.

Que, dado lo pactado en el contrato de promesa, el demandante anticipó la fecha y hora para el otorgamiento de la escritura pública que perfeccionaría la venta, para lo cual, el 7 de junio de 2022 comunicó a la dirección de correo electrónico informada por la demandada eyrsyuly@hotmail.com, que la escritura pública que perfeccionaría la venta del inmueble sería otorgada el 14 de julio de 2022, a las 10:00 a.m., en la Notaría Segunda del Círculo de Rionegro-Antioquia, comunicación también enviada mediante correo electrónico certificado, con constancia de entrega el mismo día 7 de junio de 2022.

Que, en la fecha y hora acordada, el demandante compareció a la Notaría Segunda de Rionegro-Antioquia, con el fin de dar cumplimiento al contrato de promesa de compraventa y, en consecuencia, otorgar la Escritura Pública que perfeccionaría la venta, sin embargo, la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, no se hizo presente, habiéndose extendido el acta de comparecencia número 18 del 14 de julio de 2022.

Que, el demandante Edgar Iván Arcila Giraldo, ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones a su cargo, tanto con las pactadas en el contrato de promesa de compraventa celebrado el 22 de septiembre de 2021, como las pactadas en el Otrosí N° 1 del 4 de abril de 2022, lo que no ha efectuado la demandada.

En escrito separado, como medidas cautelares, solicitó el demandante:

Primera: De conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso, le solicito que se decrete como medida cautelar **la inscripción de la demanda** sobre los siguientes bienes de la demandada:

1.1. La finca “La Carolina” ubicada en la vereda El Vaivén, del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Identificada con el folio de matrícula inmobiliaria número 068-13334, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Simití. Cuyos linderos constan en la Escritura Pública número 159, otorgada el 13 de mayo de 2020, ante la Notaría Única de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Dicho inmueble fue adquirido por la demandada Elfi Juliana Rúa Sánchez, por compra al señor Mauricio Gómez Lesmes, protocolizada mediante la Escritura Pública número 159, otorgada el 13

de mayo de 2020, ante la Notaría Única de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

1.2. La casa de habitación 201, ubicada en la carrera 52 N° 45 – 45, barrio José Antonio Galán, del municipio de Segovia, Antioquia. Identificada con el folio de matrícula inmobiliaria número 027-32820, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Segovia. Cuyos linderos y demás especificaciones constan en la Escritura Pública número 78, otorgada el día 15 de febrero de 2016, ante la Notaría Única de Segovia. Dicho inmueble fue adquirido por la demandada Elfi Juliana Rúa Sánchez, por donación que le hiciera al señor Óscar William Rúa Henao, protocolizada Proceso: Declarativo verbal de mayor cuantía Acción resolutoria o de cumplimiento Demandante: Edgar Iván Arcila Giraldo Demandada: Elfi Juliana Rúa Sánchez Asunto: Solicitud de medidas cautelares mediante la Escritura Pública número 78, otorgada el día 15 de febrero de 2016, ante la Notaría Única de Segovia.

1.3. Sobre la cuatrimoto de placa FTI 76B.

(...) de conformidad con lo establecido en literal c) del numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso, le solicito que como **medida cautelar innominada**, se decreten las siguientes:

Segunda: Decrétese el secuestro del lote de terreno con casa de habitación situado en el paraje La Chapa, jurisdicción del municipio de El Peñol, Antioquia. El cual se identificaba con el código catastral 2010000170018700000000 y tenía asignada la ficha predial número 16366755. Se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria número 018-176985 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla.

Tercera: Decrétese el secuestro de los muebles y enseres con los que se encuentra dotada la casa de habitación construida sobre el lote de terreno situado en el paraje La Chapa, jurisdicción del municipio de El Peñol, Antioquia. El cual se identificaba con el código catastral 2010000170018700000000 y tenía asignada la ficha predial número 16366755. Se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria número 018-176985 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla”.

En providencia del 3 de febrero de 2023 el juzgado de primera instancia decidió:

Primero: Decreta la medida cautelar de inscripción de demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 068-13334 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Simiti-Bolivar. Bien inmueble de propiedad de la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.694.160.

Segundo: Decreta la medida cautelar de inscripción de demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 027-32820 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Segovia-Antioquia. Bien inmueble de propiedad de la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.694.160.

Tercero: Se decreta la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre el vehículo de placas FTI6B de propiedad de la señora Elfi Juliana Rúa Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.694.160. Oficiase a la Secretaría de Movilidad de Envigado, para que proceda a realizar la anotación en para de la medida cautelar decretada, de

inscripción de la demanda, en el registro magnético de dicho automotor.

Cuarto: Se niegan las medidas cautelares de secuestro, anunciadas por la parte demandante como medidas innominadas, por cuanto las mismas, contrario al sentir de la parte actora, no se trataría de una cautela de dicha naturaleza, sino que por el contrario sería una medida previa nominada y regulada por el artículo 595 del Código General del Proceso para procesos de carácter ejecutivo, donde, dicho sea de paso, no se discute la existencia de un derecho.

Quinto: Finalmente, requiere a la parte actora para que proceda de conformidad, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, so pena de tener por desistida la presente medida cautelar, al tenor de lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso.

Frente a la decisión que negó el decreto de la medida cautelar innominada, el profesional del derecho que representa los intereses de la parte demandante presentó recurso de apelación, para lo cual expuso que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, se redujo el principio de la taxatividad en medidas cautelares, porque se introdujo el concepto de medidas cautelares innominadas para los procesos declarativos; que las medidas cautelares innominadas son aquellas que no están taxativamente consagradas en la norma o no están expresamente consagradas para los procesos declarativos, por ello, en dichas medidas se quiere que sea el juez quien las decrete, definiendo la forma y el alcance; que el literal c) del artículo 590 del Código General del Proceso, faculta al juez para que en los procesos declarativos decrete *“cualquier otra medida cautelar ... que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”* de donde se concluye que se trata de cautelas diferentes a las consagradas expresamente por el legislador para los procesos declarativos, lo que significa que la norma no excluye la posibilidad, si el juez lo encuentra razonable, pueda decretar como medida cautelar innominada alguna de las medidas propias del proceso ejecutivo, las cuales para el proceso declarativo tendrían la naturaleza de innominadas, al no estar expresamente consagradas para este tipo de procesos, por lo que no le asiste razón al Despacho al considerar que no es posible decretar como medida cautelar innominada el secuestro, por considerarlo nominado al estar consagrado para otro tipo de procesos, debiendo estudiar el *a quo* la concurrencia de los requisitos de procedibilidad frente a cada una de las medidas cautelares solicitadas como innominadas, los cuales se cumplen plenamente, en tanto existe solicitud de parte; es una

medida razonable y eficaz para la protección del derecho objeto del litigio debido a que la pretensión principal del proceso es la resciliación de la promesa de compraventa del inmueble y los muebles y enseres con los que se encuentra amueblado el mismo, cuya tenencia física la ostenta la demandada; porque se trata de un inmueble ubicado en zona rural del municipio de El Peñol, Antioquia, con alto potencial turístico, el cual, requiere un cuidado especial para evitar su deterioro; porque la medida impide que se concrete una infracción al derecho controvertido, en tanto, al secuestrarse el inmueble y los muebles y enseres con los que se encuentra amueblado, se deja en administración, custodia, y cuidado de un auxiliar de la justicia, quien tiene el deber de velar por la conservación de los mismos; también se previenen daños en los bienes objeto del litigio y además se asegura la efectividad de las restituciones; que el solicitante está legitimado y tiene interés en el proceso, como también apariencia de buen derecho; además, oportunamente allegó la póliza judicial cubriendo la caución señalada en el numeral cuarto del auto admisorio.

Mediante auto del 14 de febrero de 2023, el Juzgado de primera instancia concedió el recurso de apelación y el expediente fue repartido a conocimiento del este Despacho el día 23 de febrero de 2023, siendo procedente decidir de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código General del Proceso.

II. CONSIDERACIONES

1. LA TUTELA CAUTELAR.

Bien se sabe que las medidas cautelares están configuradas para asegurar el cabal cumplimiento de las decisiones que se adopten en el proceso jurisdiccional, principalmente, en la providencia que resuelva las pretensiones del juicio. El concepto doctrinario más autorizado en materia procesal enseña que la finalidad de las cautelas es la de evitar *“aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso”*¹.

La Corte Constitucional también ha tenido la oportunidad de referirse a las medidas cautelares; así en la Sentencia T 379 de 2004, expresó:

¹ CARNELUTTI, Franceso. *Derecho y proceso*. Buenos Aires, E.J.E.A., 1971, pág. 415

(...) son instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

Como características de la medida cautelar es adecuado indicar que consiste generalmente en un acto jurisdiccional, ya que por medio de esta se cumple una de las funciones del juez, que es asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. También se caracterizan las medidas por ser instrumentales o accesorias, ya que si se miran individualmente no tienen sentido o efecto práctico. La provisionalidad como característica es corolario de la anterior, ya que solo persisten mientras esté en curso el proceso y después de éste en casos especiales.

2. ACTUAL RÉGIMEN DE MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS CIVILES DECLARATIVOS.

En desarrollo y actualización de la tutela cautelar brindada por la especialidad civil de la jurisdicción, uno de los fines declarados para la expedición del Código General del Proceso, es la ampliación considerable de las medidas cautelares, abandonando entre otras cosas la tradicional orientación restringida y taxativa del régimen cautelar.

Manifestación irrefutable de lo anterior es la redacción del artículo 590 *ibidem*², conforme al cual:

En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de

² Artículo vigente desde el 1° de octubre de 2012, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 627 del Código General del Proceso.

bienes.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.

El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad.

c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Quando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar

uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia.

Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Parágrafo segundo. Las medidas cautelares previstas en los literales b) y c) del numeral 1 de este artículo se levantarán si el demandante no promueve ejecución dentro del término a que se refiere el artículo 306 (Resaltado intencional).

Nótese que la norma citada y particularmente el aparatado destacado, dedicado a la denominada medida cautelar innominada, se encargan de modificar radicalmente la óptica de la medida cautelar en el proceso civil. Sobre el anterior aspecto ha tenido la oportunidad del comentar la doctrina nacional:

La cautela innominada en el Código General del Proceso. En el texto del segmento distinguido con la letra c) del artículo 509 del Código General del Proceso, se consagra la que podríamos llamar cautela atípica, genérica o innominada, lo que significa que el Código General del Proceso abandona el *numerus clausus* en medidas cautelares, para abrir esta modalidad de garantía hacia el *numerus apertus*. El Código General del Proceso, en materia de medidas cautelares, expresa un sesgo *ius publicista* en tanto, otorga un mayor poder al juez, lo cual se expresa de varias maneras en el artículo 590. Así, cuando el artículo se refiere a la proporcionalidad, necesidad y utilidad de la medida, otorga al Juez en el caso de la cautela genérica un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre esas medidas. No quiere decir ello que el Juez pueda de oficio inventar o decretar la medida que en su parecer sea apropiada, sin que haya petición de parte, **pero una vez le ha sido solicitada una medida que puede afectar en mayor grado los derechos del demandado, podría el Juez de oficio, sustituirla por otra más razonable.** Igualmente, a lo largo de la letra c), del artículo 590 del C.G.P., el Juez puede reducir la intensidad de la medida para decretar una más benigna”³ (Resaltado intencional).

De manera que es deber del Juez frente a una solicitud cautelar, efectuar un estudio que desborde la simple revisión de las medidas nominadas, para consultar la naturaleza y demás particularidades de la causa promovida, y si es del caso decretar una cautela con la entidad de asegurar la eficacia del proceso como garantía de los derechos sustanciales reconocidos en la Constitución y la Ley.

³ VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. *Algunos apuntes acerca de las cautelas en el Código General del Proceso*. En: *Memorias XXXIII Congreso Colombiano de Derecho procesal*. Septiembre 12, 13 y 14 de 2012.

3. CASO CONCRETO.

La censura de la parte recurrente se cimienta en cuestionar la decisión mediante la cual el juzgado de primer grado resolvió negar el decreto de las cautelas que dicha parte solicitó como innominadas y consistentes en el secuestro del lote de terreno con casa de habitación identificado con matrícula inmobiliaria número 018-176985 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla y el secuestro de los muebles y enseres con los que se encuentra dotada la casa de habitación referida.

Como se viene estudiando en las consideraciones generales de esta providencia, el artículo 590 del C.G.P. regula las medidas cautelares en procesos declarativos como el presente y establece las siguientes posibilidades: (i) inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás, cuando la demanda versa, de forma directa o consecuencial, sobre el dominio u otro derecho real principal; además, el posterior secuestro de los bienes objeto del proceso, cuando la sentencia es favorable; (ii) inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de propiedad del demandado cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual y el posterior embargo y secuestro de dichos bienes cuando la sentencia de primer grado es favorable; (iii) cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

La norma referida es clara y no se presta para interpretaciones ambiguas al establecer como cautelas en procesos declarativos, la inscripción de la demanda, el embargo y secuestro y, además, al disponer la posibilidad de decretar **cualquier otra medida que el juez encuentre razonable** para la protección del derecho objeto del litigio, de donde se desprende con claridad que la inscripción de la demanda, el embargo y secuestro son medidas cautelares nominadas en estos procesos, que deben cumplir los requisitos que la norma establece para su decreto y que, las cautelas innominadas serán cualquier otra medida diferente a éstas que el juez considere como razonable para proteger el derecho objeto de litigio.

Es verdad que, con la posibilidad de decreto de medidas cautelares innominadas, el Código General del Proceso dejó de lado, en cierta medida, la taxatividad de las cautelas, pero ello no significa como pretende hacer ver la parte recurrente, que una cautela claramente nominada y regulada en la norma pueda entenderse, al mismo tiempo, para el mismo supuesto de la norma, como innominada, simplemente porque no se cumplen los requisitos para su decreto, pues ello conllevaría a que de forma amañada se decreten cautelas que realmente no cumplen con los requisitos para ello.

Es que entender la norma como pretende la parte recurrente conllevaría entonces a sostener que, a pesar de no cumplirse las exigencias que establece la norma para el decreto de una cautela nominada, la misma se puede decretar sin el cumplimiento de esas exigencias, bajo el entendimiento de tratarse de una cautela innominada, lo que resulta a todas luces irregular y desconocedor del ordenamiento jurídico.

La discusión de ser el secuestro cautela nominada para procesos ejecutivos, realmente no es relevante, porque esa medida también está dispuesta como tal, esto es, como cautela nominada, en los procesos declarativos, sólo que bajo presupuestos diferentes al ejecutivo, lo que resulta totalmente lógico si se tiene en cuenta que en el proceso ejecutivo se parte de la existencia clara, expresa y actual de un derecho crediticio, lo que no ocurre en el proceso declarativo, en el que se debe esperar hasta la sentencia para que la existencia del derecho sea declarada.

Ahora, no descarta del todo este Despacho, en este caso concreto, la posibilidad de decreto de la medida cautelar de secuestro antes de la sentencia, respecto de algunos bienes muebles, pero no como cautela innominada, sino bajo el amparo del literal 1 numeral a del artículo 590 del C.G.P., norma que dispone la posibilidad del secuestro de **bienes no sujetos a registro** *“cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes”*, artículo que a criterio de este Despacho resulta aplicable en este caso, porque a pesar que la discusión principal radica en torno a una responsabilidad contractual, el fondo del asunto

involucra el derecho de dominio del demandante respecto de los bienes prometidos en venta, de los que incluso se pide restitución y donde se incluyen algunos muebles y enseres no sujetos a registro.

No dispone este Despacho de forma directa el decreto de esa cautela de secuestro respecto de bienes no sujetos a registro porque, además que no ha sido solicitada en esa forma que sí resulta procedente, en la petición no se describieron los muebles y enseres de los que se pretende el secuestro pidiéndose únicamente *“el secuestro de los muebles y enseres con los que se encuentra dotada la casa de habitación construida sobre el lote de terreno situado en el paraje La Chapa, jurisdicción del municipio de El Peñol, Antioquia. El cual se identificaba con el código catastral 2010000170018700000000 y tenía asignada la ficha predial número 16366755. Se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria número 018-176985 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla”*, de donde se evidencia que sólo se detalló el inmueble y no los muebles y enseres no sujetos a registro, que serían los susceptibles de secuestro.

Las razones expuestas conllevan a que se confirme la decisión apelada, toda vez que puede concluirse que en el caso concreto no se cumplen los condicionamientos legales que permiten el decreto del secuestro pedido de forma innominada, no siendo viable en esta instancia y momento, el decreto del secuestro de bienes muebles y enseres bajo el amparo del numeral 1 literal a del artículo 590 del C.G.P. por no haberse pedido así la medida y no haberse descrito debidamente esos bienes.

4. COLOFÓN Y COSTAS.

En suma, se impartirá confirmación a la decisión objeto de alzada. No obstante las resultas del recurso interpuesto, no habrá lugar a imponer condena en costas a la parte recurrente por cuanto las mismas no se acreditaron causadas en esta instancia.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 3 de febrero de 2023, mediante el cual se negó el decreto de las medidas cautelares llamadas como innominadas por la parte actora, atendiendo a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

TERCERO. Oficiar al Juzgado de primera instancia informando la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2185480d3561342404931a71ba2b0ccde5405e82463d66a3653214945c9c28ad**

Documento generado en 24/04/2023 04:28:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>